

La selva oscura de América

El horrible asesinato en pleno barrio diplomático de Wáshington, hace dos días, del excanciller y exembajador de Chile en los Estados Unidos durante el gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, es la tercera acción criminal terrorista perpetrada en el exterior contra personalidades políticas adversas al régimen pinochetista que sojuzga a Chile a partir de su asalto al poder el 11 de septiembre de 1973.

La primera sucedió el 30 de septiembre de 1974, cuando el exministro del Interior de Salvador Allende y excomandante en jefe del ejército chileno, general Carlos Prats y su esposa Sofía, fueron asesinados en Buenos Aires, también por medio de una bomba de alto poder explosivo. La segunda fue en 1975 en Roma, cuando el exsenador demócratacristiano y exministro del Interior del gobierno de Frei, Bernardo Leighton, y su esposa, Ana, fueron balaceados bárbaramente a boca de jarro en la cabeza, sobreviviendo ambos en dura invalidez.

Como en los dos casos anteriores, el régimen instalado en Chile se ha apresurado a lamentar lo ocurrido; pero también, como en los casos anteriores, la opinión mundial no ha vacilado en atribuir estos crímenes a la DINA, repugnante *gestapo* civil del régimen que se halla bajo la directa y personal comandancia del propio Pinochet.

Los senadores Edward Kennedy, George McGovern y James Abourezk fueron claros. "La tiranía del régimen militar chileno se extiende ahora a los Estados Unidos", afirmó Abourezk. "No tenemos dudas de los móviles políticos", dijo McGovern. Anunciando que promoverá una investigación en el Congreso, Kennedy señaló: "El único crimen de Letelier fue creer en la libertad de su pueblo" y "por su lucha contra las violaciones a los derechos humanos por parte de la junta militar, fue despojado de la ciudadanía chilena".

Efectivamente, una semana antes, un decreto de Pinochet revocaba la nacionalidad a Letelier, acusándolo de "interferir con el normal apoyo financiero para Chile", como anota en su editorial de ayer *The New York Times*.

La reacción de estupor e indignación en Wáshington, en las Naciones Unidas y en el mundo, ha sido inmediata y generalizada. Pero consumado el crimen, mayores son las preguntas que todos se hacen frente a lo que se ve como una nueva prueba de la impunidad y libertad de que goza el crimen institucionalizado por un régimen fascista latinoamericano apoyado financieramente e instalado con la ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que obedece a un nuevo modelo económico y político de subordinación a los grandes intereses capitalistas norteamericanos que se ha extendido a todo el cono sur del continente.

En medio de la campaña presidencial en los Estados Unidos, resulta sorprendente además la decisión del crimen atroz en el medio de Wáshington, que le cuesta la vida también a Ronnie Karpen Morffit, miembro del Institute for Policy Studies —donde ocupaba un alto cargo Letelier—, y que deja gravemente herido a su esposo.

El crimen no favorece precisamente a la junta militar. Pero, por una parte, desde el bombardeo de La Moneda y el asesinato de Allende, la política de la junta no ha sido el hacerse aceptable al mundo, sino el de golpear implacablemente, para lo cual ha podido contar con todo el apoyo financiero que ha requerido. Por otra parte, está por verse el resultado que pudiera tener la acción del Congreso en los Estados Unidos frente a la política encallecida de su gobierno en América Latina.

Sólo cabría especular, sin mucha base, sobre los efectos que pueda tener en este caso la investigación del Senado anunciada por Kennedy, o la moción presentada ayer a mediodía en la Cámara de Representantes por los diputados Toby Moffet, Don Fraser, Edward Koch, Ron Dellums, Dante Fascell y Bella Abzug, instando al poder ejecutivo a “una investigación completa y detallada de las circunstancias políticas del asesinato, no sólo de la investigación de carácter policiaco”.

Son muchas y grandes ya las muertes en los Estados Unidos por motivos claramente políticos, y las investigaciones que se han realizado han dejado más dudas que claridades sobre los verdaderos asesinos.

La explicación de algunos de los mayores crímenes basada en la locura de sus presuntos autores y, en el caso del presidente Kennedy, en la locura incluso del público ejecutor del presunto autor, calza demasiado bien con la ideologización de todo un pueblo que no quiere y no se atreve a mirar de frente a la descomposición de su sociedad ni su responsabilidad política, y es también demasiado ajena al razonar del resto del mundo.

Sólo cabe desear que esta vez las investigaciones que se realicen satisfagan, y no lleven al descubrimiento de un loco, y jamás a los que fueron cerebros del crimen.

Pero la medida de la sanción que quizás aún sea posible esperar de un pueblo como el norteamericano para los crímenes del régimen instalado en Chile, así como del peso que todavía pueda tener el Congreso en la política exterior de los Estados Unidos, estará dada de todos modos, sobre todo en este momento de elecciones presidenciales, por el cambio radical que pueda lograrse en la orientación de las relaciones de los Estados Unidos con los demás países del hemisferio.

Creemos que estamos ya al borde de un momento sin retorno en la relación de ambos mundos, y en la cual la iniciativa ha sido hasta ahora exclusivamente de los Estados Unidos.

Creemos que no ya un paso nuevo por parte de ellos, sino el mero transcurso de un breve tiempo en la dirección que dicho país ha impreso a sus relaciones hemisféricas, llevará a una guerra difusa, no declarada, no con-

vencional, pero no menos repugnante, larga y cruel, cuyas consecuencias serán tan graves para nuestros pueblos como para el pueblo norteamericano.

El brutal asesinato de Orlando Letelier en el centro diplomático de Wáshington nos indica, efectivamente, que esa guerra —ya iniciada hace tiempo por un solo lado contra sus propios pueblos por los así llamados “gobiernos amigos” de los Estados Unidos en el continente— penetra impunemente en Norteamérica, donde ya no existe protección para los hombres que ella ha sentenciado, y cuya liberación de una cárcel sin causa, como fue el caso de Letelier, fue negociada previamente, a través de embajadores y secretarios de Estado siempre sonrientes, con amplios beneficios, préstamos, ayuda militar, avales políticos y asambleas de la Organización de los Estados Americanos.

Tanto crimen, si no será el caso que alcance su merecido castigo, tendrá su némesis inexorable.

Allende murió en su decisión de no adelantarse en la sangre a sus enemigos. Tras él, miles y miles murieron por haber defendido la libertad. En aras de la explotación predatoria de todo un mundo, ¿se pedirá la vida de todos, uno a uno, los que proclaman su no aceptación de la ley del saqueo, del crimen y de la fuerza?

23 de septiembre de 1976

José María Bulnes Aldunate